

No. 42749

**Mexico
and
Peru**

Agreement on the execution of criminal sentences between the Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Peru. Mexico City, 25 October 2002

Entry into force: *4 January 2004 by the exchange of instruments of ratification, in accordance with article XV*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Mexico, 24 May 2006*

**Mexique
et
Pérou**

Accord relatif à l'exécution des sentences pénales entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République du Pérou. Mexico, 25 octobre 2002

Entrée en vigueur : *4 janvier 2004 par échange des instruments de ratification, conformément à l'article XV*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Mexique, 24 mai 2006*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**CONVENIO SOBRE EJECUCION DE SENTENCIAS PENALES ENTRE EL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DEL PERU**

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Perú, en adelante "las Partes";

DESEANDO facilitar la readaptación social de las personas sentenciadas mediante la adopción de métodos adecuados;

CONSIDERANDO que deben lograrse estos objetivos dándoles a los nacionales privados de su libertad o en régimen de libertad condicional, como consecuencia de una sentencia penal, la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen;

Han convenido lo siguiente:

**ARTICULO I
DEFINICIONES**

Para los efectos del presente Convenio se entenderá por:

1.- "**Sentencia**": La decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como pena por la comisión de un delito, la privación de la libertad o restricción de la misma, en un régimen de libertad vigilada, condena de ejecución condicional u otras formas de supervisión sin detención.

Para los efectos del presente Convenio se entenderá que una decisión judicial es definitiva cuando no esté pendiente de resolverse o interponer un recurso o procedimiento legal alguno que la pueda modificar, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos que así lo prevea la legislación nacional de alguna de las Partes.

2.- "**Persona Sentenciada**": Aquella que cumpla una condena impuesta por una sentencia firme.

3.- "**Parte Receptora**": El Estado al cual la persona sentenciada pueda ser trasladada o lo haya sido ya, con el fin de cumplir su condena.

4.- "**Parte Trasladante**": El Estado que haya impuesto una condena y del cual la persona sentenciada pueda ser trasladada o lo haya sido.

5.- "**Condena**": La pena privativa o restrictiva de libertad por cumplirse en un establecimiento penal, hospital, institución o régimen de supervisión sin detención en la Parte Trasladante, que haya impuesto un órgano judicial de dicha Parte, con una duración limitada, por razón de un delito.

ARTICULO II PRINCIPIOS GENERALES

1.- Las Partes se obligan, en las condiciones previstas por el presente Convenio a prestarse mutuamente la más amplia colaboración posible en materia de traslado de personas sentenciadas.

2.- Una persona sentenciada en el territorio de una Parte podrá, con arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio, ser trasladada a la otra Parte para cumplir la condena que se le haya impuesto. Con tal fin podrá expresar, bien a la Parte Trasladante o bien a la Parte Receptora, su voluntad de ser trasladada en virtud del presente Convenio, a efecto de que las mismas analicen la solicitud en cuestión y, en su caso, expresen su aprobación, de conformidad con el Artículo VI.

3.- El traslado podrá ser solicitado por cualquiera de las Partes, de conformidad con el Artículo VI del presente Convenio.

**ARTICULO III
CONDICIONES PARA EL TRASLADO**

El presente Convenio se aplicará bajo las condiciones siguientes:

- 1.- Que la persona sentenciada sea nacional de la Parte Receptora.
- 2.- Que la parte de la condena que faltare por cumplir al momento de efectuarse la solicitud sea superior a seis (6) meses.
- 3.- Que la sentencia sea definitiva de conformidad con el Artículo I del presente Convenio.
- 4.- La persona trasladada no podrá ser nuevamente enjuiciada en la Parte Receptora por el delito que motivó la condena impuesta por la Parte Trasladante y su posterior traslado.
- 5.- Que la persona sentenciada otorgue su consentimiento por escrito. En caso de que dicha persona sea menor de edad o incapaz, las Partes podrán solicitar que el consentimiento sea otorgado por escrito por aquella persona que esté legalmente facultada de conformidad con su legislación interna.
- 6.- Que la persona sentenciada haya cumplido o garantizado el pago, a satisfacción de la Parte Trasladante, de las multas, gastos de justicia, reparación civil y condenas pecuniarias de toda índole que corren a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia condenatoria. Se exceptúa la persona sentenciada que acredite debidamente su insolvencia.
- 7.- Que la Parte Trasladante y la Parte Receptora manifiesten expresamente su consentimiento con el traslado, el que guardará armonía con la legislación interna de ambas Partes.

8.- Que la sanción a cumplirse no sea la pena de muerte, o cualquier otra no prevista por la legislación nacional de las Partes.

9.- Que el delito por el cual se le dictó la sentencia no sea político. Asimismo, que la condena no haya sido resultado únicamente de un delito militar.

10.- Que el delito por el cual la persona fue sentenciada sea también punible en la Parte Receptora, en la inteligencia de que esta condición no sea interpretada en el sentido de requerir que los delitos tipificados en las leyes de ambas Partes sean idénticos en aspectos que no afectan la índole o naturaleza del delito.

ARTICULO IV AUTORIDADES EJECUTORAS

1.- Para la ejecución del presente Convenio el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos designa como autoridad ejecutora a la Secretaría de Seguridad Pública, a través de su Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

2.- Para la ejecución del presente Convenio el Gobierno de la República del Perú designa como autoridad ejecutora al Ministerio de Justicia.

ARTICULO V OBLIGACION DE FACILITAR INFORMACION

1.- Las Partes harán de conocimiento el presente Convenio a cualquier persona sentenciada a quien pudiera aplicársele.

2.- Si la persona sentenciada hubiera expresado a la Parte Trasladante su voluntad de ser trasladada en virtud del presente Convenio, dicha Parte deberá informar de ello a la Parte Receptora con la mayor diligencia posible después de que la sentencia sea definitiva.

3.- La información comprenderá:

- a) el nombre y apellidos, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona sentenciada;
- b) acta de nacimiento de la persona sentenciada o de algún documento idóneo conforme a la legislación interna de la Parte Receptora, que acredite su nacionalidad;
- c) en su caso, su dirección en la Parte Receptora;
- d) una exposición de los hechos que hayan originado la condena;
- e) la naturaleza, duración y fecha de inicio de la condena;
- f) copia certificada de la sentencia, y
- g) cualquier otra información que la Parte Receptora estime necesaria relacionada con las consecuencias del traslado y alcances del presente Convenio.

4.- Si la persona sentenciada hubiera expresado a la Parte Receptora su deseo de ser trasladada, la Parte Trasladante comunicará a dicha Parte, a petición suya, la información a que se refiere el numeral 3 que antecede.

5.- Deberá informarse por escrito a la persona sentenciada de cualquier gestión emprendida por la Parte Trasladante, así como de la decisión tomada por cualquiera de las Partes respecto a su petición de traslado.

ARTICULO VI SOLICITUD DE TRASLADO

1.- Cada traslado de personas mexicanas sentenciadas se iniciará mediante una solicitud formulada por escrito y presentada por la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la República del Perú al Ministerio de Relaciones Exteriores.

2.- Cada traslado de personas peruanas sentenciadas se iniciará mediante una solicitud formulada por escrito y presentada por la Embajada de la República del Perú en los Estados Unidos Mexicanos a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

3.- Si la Parte Trasladante considera la solicitud de traslado de la persona sentenciada y expresa su consentimiento, comunicará lo antes posible a la Parte Receptora su aprobación, de modo que una vez que se hayan completado los arreglos internos se pueda efectuar el traslado.

4.- La entrega de la persona sentenciada por las autoridades de la Parte Trasladante a las de la Parte Receptora se hará en el lugar que convengan ambas Partes. La Parte Receptora será responsable de la custodia de la persona sentenciada, desde el momento en que ésta le sea entregada, dejándose constancia en el acta.

5.- Para tomar la decisión relativa al traslado de una persona sentenciada se deberá tomar en consideración que éste contribuya positivamente a su rehabilitación social, la gravedad del delito y las posibles vinculaciones del autor con el crimen organizado, su estado de salud y los vínculos que pueda tener con la sociedad de cada Parte.

6.- Cuando cualquiera de las Partes no apruebe el traslado de una persona sentenciada, notificará su decisión sin demora a la otra Parte, expresando la causa o motivo de la denegatoria.

7.- Negada la autorización del traslado, la Parte Receptora no podrá efectuar una nueva solicitud, pero la Parte Trasladante podrá revisar su decisión a instancia de la Parte Receptora cuando ésta alegare circunstancias excepcionales.

8.- Antes de efectuarse el traslado, la Parte Trasladante brindará a la Parte Receptora, si ésta lo solicita, la oportunidad de verificar, mediante un funcionario designado por la Parte Receptora, a través de la vía diplomática, que el consentimiento de la persona sentenciada ha sido expresado de manera voluntaria y con pleno conocimiento de las consecuencias legales inherentes al mismo.

9.- Los gastos ocasionados con motivo del traslado, correrán a cargo de la Parte Receptora. Sin embargo, ésta podrá efectuar las gestiones necesarias para que la persona sentenciada pague los gastos correspondientes.

ARTICULO VII DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

1.- La Parte Receptora, a petición de la Parte Trasladante, facilitará a esta última los documentos siguientes:

- a) una copia de las disposiciones legales pertinentes de la Parte Receptora, de las cuales resulte que los actos u omisiones que han dado lugar a la condena en la Parte Trasladante, constituyen un delito o infracción penal en su territorio;
- b) una declaración del efecto, con respecto a la persona sentenciada, de cualquier ley o reglamento pertinente, relativo a su detención en la Parte Receptora después de su traslado.

2.- Si se solicitare un traslado, la Parte Trasladante deberá facilitar a la Parte Receptora los documentos que a continuación se detallan, a menos que una u otra de las Partes haya indicado su desacuerdo con el traslado:

- a) una copia de la sentencia y del texto de las disposiciones legales aplicadas que sirvieron de sustento a la decisión;
- b) la indicación de la duración de la condena ya cumplida, incluida la información referente a cualquier detención preventiva, remisión de una pena u otra circunstancia relativa al cumplimiento de la condena;
- c) una declaración en la que conste el consentimiento para el traslado a que se refiere el numeral 5 del Artículo III otorgada ante la autoridad consular competente;
- d) en su caso, informe médico o social acerca de la persona sentenciada, o sobre su tratamiento en la Parte Trasladante y cualquier recomendación para la continuación del mismo en la Parte Receptora.

3.- Si la Parte Receptora considera que los informes suministrados por la Parte Trasladante no son suficientes para permitirle la aplicación del presente Convenio, podrá solicitar información complementaria.

4.- Los documentos que se entreguen las Partes, en aplicación del presente Convenio, serán eximidos de las formalidades de legalización.

ARTICULO VIII INFORMACION ACERCA DEL CUMPLIMIENTO

La Parte Receptora facilitará información a la Parte Trasladante acerca del cumplimiento de la condena:

- a) cuando se haya cumplido la condena;
- b) si la persona sentenciada se evadiere; o,
- c) si la Parte Trasladante le solicitare un informe especial.

ARTICULO IX JURISDICCION

La Parte Trasladante mantendrá jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta y cualquier otro procedimiento que disponga la revisión o modificación de las sentencias dictadas por sus órganos judiciales. La Parte Trasladante retendrá, asimismo, la facultad de indultar o conceder amnistía o clemencia a la persona sentenciada. La Parte Receptora al recibir aviso de cualquier decisión al respecto, deberá adoptar con prontitud las medidas que correspondan en concordancia con su legislación sobre la materia.

**ARTICULO X
CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA**

1.- La ejecución de la condena de la persona sentenciada trasladada se cumplirá de acuerdo con las normas del régimen penitenciario de la Parte Receptora. En ningún caso podrá modificarse por su naturaleza o por su duración, la pena privativa de libertad pronunciada por la Parte Trasladante.

2.- Ninguna condena será ejecutada por la Parte Receptora de tal manera que prolongue la duración de la privación de la libertad más allá del término impuesto por la sentencia del tribunal de la Parte Trasladante.

3.- Si un nacional de una Parte estuviera cumpliendo una condena impuesta por la otra Parte bajo el régimen de condena condicional o de libertad condicional, anticipada o vigilada, podrá cumplir dicha condena bajo la vigilancia de las autoridades de la Parte Receptora.

4.- La autoridad judicial de la Parte Trasladante solicitará las medidas de vigilancia que interesen, mediante exhorto que se diligenciará por la vía diplomática.

5.- Para los efectos del presente Artículo, la autoridad competente de la Parte Receptora podrá dictar medidas de vigilancia solicitadas por la Parte Trasladante y mantendrá informado al exhortante sobre la forma en que se llevará a cabo la vigilancia de la persona sentenciada y le comunicará de inmediato el incumplimiento por parte del condenado de las obligaciones que éste haya asumido.

**ARTICULO XI
MENOR BAJO TRATAMIENTO ESPECIAL**

El presente Convenio se aplicará a menores bajo tratamiento especial conforme a las leyes de las Partes. La ejecución de la medida privativa de libertad que se aplique a tales menores de edad se cumplirá de acuerdo con las leyes de la Parte Receptora. Para el traslado se deberá obtener el consentimiento expreso del representante legal del menor, de conformidad con el numeral 5 del Artículo III del presente Convenio.

**ARTICULO XII
FACILIDADES DE TRANSITO**

1- Si cualquiera de las Partes celebrara un Convenio para el traslado de personas sentenciadas con un tercer Estado, la otra Parte deberá colaborar facilitando el tránsito por su territorio, de las personas sentenciadas en virtud de dicho Convenio.

2.- La Parte que tenga intención de efectuar tal traslado, deberá dar aviso previo a la otra Parte.

**ARTICULO XIII
APLICACION TEMPORAL**

El presente Convenio podrá aplicarse también al cumplimiento de condenas dictadas antes de su entrada en vigor.

**ARTICULO XIV
PROSECUCION DEL CUMPLIMIENTO**

Con objeto de cumplir con los propósitos del presente Convenio, cada una de las Partes adoptará las medidas legislativas necesarias y establecerá los procedimientos administrativos adecuados, para que la sentencia con pena privativa de libertad impuesta por la Parte Trasladante tenga efecto legal en la Parte Receptora.

**ARTICULO XV
VIGENCIA Y MODIFICACION DEL CONVENIO**

1.- El presente Convenio quedará sujeto a ratificación y entrará en vigor a los treinta (30) días a partir de la fecha del intercambio de los respectivos instrumentos de ratificación.

2.- El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes y las modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el primer numeral del presente Artículo.

3.- Este Convenio tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo, mediante notificación escrita a través de la vía diplomática. La denuncia será efectiva ciento ochenta (180) días después de haberse efectuado dicha notificación.

Firmado en la Ciudad de México, el veinticinco de octubre de dos mil dos, en dos ejemplares originales, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

**POR EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**


Jorge Castañeda
Secretario de Relaciones Exteriores

**POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DEL PERU**


Allan Wagner
Ministro de Relaciones Exteriores

[TRANSLATION - TRADUCTION]

CONVENTION ON THE EXECUTION OF PENAL SENTENCES BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PERU

The Government of United Mexican States and the Government of the Republic of Peru, hereinafter referred to as "the Parties";

Desiring to use suitable methods to enable offenders to reintegrate into society;

Considering that this objective should be achieved by allowing persons sentenced to terms of imprisonment, parole or probation the possibility of serving their sentence in their country of origin;

Have agreed as follows:

Article I. Definitions

For the purposes of this Convention, the following definitions shall apply:

1. "Judgement": the definitive judicial decision that imposes a prison term, or restricts a person's freedom under a regime of parole, suspended sentence or other form of supervision without confinement, following his/her conviction of a crime.

For the purposes of this Convention, a judgement shall be considered definitive when no appeal or legal procedure is pending or remains to be filed that could alter the decision, except an exceptional review procedure in cases provided for under the national legislation of one of the Parties.

2. "Offender": the person serving a sentence passed by a definitive judgement.

3. "Receiving State": the State to which the offender may be transferred, or has already been transferred, for the purpose of serving the sentence.

4. "Sending State": the State that passed the sentence and from which the offender may be transferred or has been transferred.

5. "Sentence": the term of imprisonment or restriction of freedom to be served within a penal establishment, hospital, institution, or under a supervision regime without confinement, in the Sending State, which has been imposed by judicial body of that Party, for a limited duration, as a result of a crime.

Article II. General Principles

1. Under the conditions envisaged by this Convention, the Parties are obliged to provide the widest possible mutual collaboration in relation to the transfer of offenders.

2. Under the provisions of this Convention, offenders convicted in the territory of one Party may be transferred to the other Party to serve their sentence. For this purpose, offenders may notify either the Sending State or the Receiving State of their wish to be transferred

under this Convention. The Parties shall analyse the application in question and, if appropriate, approve the transfer pursuant to Article VI.

3. The transfer may be applied for by either of the Parties, pursuant to Article VI of this Convention.

Article III. Conditions for transfer

This Convention shall be applicable if the following conditions are satisfied:

1. The offender is a national of the Receiving State.
2. More than six months of the sentence remains to be served at the time of making the application.
3. The sentence is definitive in accordance with Article I of this Convention.
4. The person transferred shall not be subjected to a new trial in the Receiving State for the same crime that led to sentencing in the Sending State and subsequent transfer.
5. The offender provides his/her written consent. If the offender is a minor or otherwise incapable, the Parties may ask for consent to be provided in writing by the person legally authorized to do so under the offender's domestic legislation.
6. The offender has paid, or guaranteed payment of, all fines, legal expenses, civil damages and pecuniary sentences of any type for which he/she is liable under the provisions of the sentence, to the satisfaction of the Sending State. An exception is made in the case where the offender can duly prove insolvency.
7. The Sending State and the Receiving State expressly consent to the transfer, pursuant to the domestic legislation of both Parties.
8. The penalty to be fulfilled does not involve the death penalty, or any other penalty not envisaged by the domestic legislation of the Parties.
9. The crime for which the sentence was passed is not political, nor exclusively the result of a military offence.
10. The crime for which the offender was sentenced is also punishable in the Receiving State, although this shall not be interpreted as requiring that the crimes specified in the laws of both Parties be identical in aspects that do not affect the type or nature of the offence in question.

Article IV. Executing authorities

1. The Government of United Mexican States designates the Ministry of Public Security [Secretaría de Seguridad Pública] as executing authority of this Convention, acting through its Deconcentrated Administrative Social Prevention and Rehabilitation Agency [Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social].

2. The Government of Republic of Peru designates the Ministry of Justice [Ministerio de Justicia] as executing authority of this Convention.

Article V. Obligation to provide information

1. The Parties shall make the content of this Convention known to any offender to whom it may apply.
2. If the offender has notified the Sending State of his/her wish to be transferred under this Convention, that Party shall notify the Receiving State thereof as soon as possible after the sentence becomes definitive.
3. The information shall include:
 - (a) The offender's name and surnames, and date and place of birth;
 - (b) The birth certificate of the offender, or other relevant document accrediting the offender's nationality under the domestic legislation of Receiving State;
 - (c) the offender's address in the Receiving State, if any;
 - (d) A description of the acts that gave rise to the sentence;
 - (e) The nature, duration and starting date of the sentence;
 - (f) A certified copy of the sentence; and
 - (g) Any other information that the Receiving State deems necessary in relation to the consequences of the transfer and scope of this Convention.
4. If the offender has expressed to the Receiving State his/her wish to be transferred, the Sending State shall furnish the Receiving State with the information referred to in paragraph 3 above, on request.
5. The offender shall be notified in writing of any arrangements undertaken by the Sending State, and of the decision taken by either of the Parties in relation to his/her transfer request.

Article VI. Transfer request

1. Transfers of offenders who are Mexican nationals shall be initiated by written application submitted by the Embassy of United Mexican States in the Republic of Peru to the Ministry of Foreign Relations [Ministerio de Relaciones Exteriores] of Peru.
2. Transfers of offenders who are Peruvian nationals shall be initiated by written application submitted by the Embassy of the Republic of Peru in the United Mexican States to the Ministry of Foreign Relations [Secretaría de Relaciones Exteriores] of Mexico.
3. If, having considered the application, the Sending State consents to the transfer, it shall promptly notify the Receiving State of its approval, so that the transfer may be effectuated once the domestic arrangements have been completed.
4. Delivery of the offender by the authorities of the Sending State to those of the Receiving State shall occur at a place agreed upon by both Parties. The Receiving State shall be responsible for the custody of the offender from the moment at which he/she is delivered, this event being recorded in a written minute.
5. In deciding on the transfer an offender, consideration should be given to whether this will contribute positively to the offender's reintegration into society; the seriousness of

the crime and possible links between its perpetrator and organized crime; the offender's state of health and possible links he/she may have with society in both Parties.

6. Should either Party not approve the transfer, it shall notify its decision without delay to the other Party, indicating the cause of, or motive for, the refusal.

7. Once authorization for the transfer has been denied, the Receiving State may not file a new application; nonetheless, the Sending State may review its decision at the request of the Receiving State if the latter alleges exceptional circumstances.

8. Prior to the transfer, the Sending State shall afford an opportunity to the Receiving State, if it so requests, to verify that the Offender's consent to the transfer is given voluntarily and with full knowledge of the consequences thereof, through an official designated by the Receiving State.

9. Any expenses arising from by the transfer shall be borne by the Receiving State. Nonetheless, the latter may make such arrangements as are necessary for the offender to pay the corresponding costs.

Article VII. Supporting documentation

1. The Receiving State shall provide the following documents to the Sending State, upon request:

- (a) A copy of the relevant laws of the Receiving State, on the basis of which the acts or omissions giving rise to the sentence in the Sending State constitute a crime or criminal offence in its territory;
- (b) A statement of the effect, with regard to the offender, of any law or regulation relating to his/her confinement in the Receiving State following transfer.

2. If a transfer is requested, the Sending State shall furnish the documents listed below to the Receiving State, unless one or other of the Parties has indicated its disapproval of the transfer:

- (a) Copy of the sentence and the text of the laws on which the judgement was based;
- (b) Indication of the length of the sentence already served, including information relating to any preventive confinement, remission of sentence or other circumstance relating to fulfilment of the sentence;
- (c) A statement containing the consent to the transfer referred to in paragraph 5 of Article III, made before the competent consular authority;
- (d) Where appropriate, a medical or social report on the offender, or on his/her treatment in the Sending State, and any recommendation for continuation thereof in the Receiving State.

3. If the Receiving State considers that the reports supplied by the Sending State are insufficient to allow it to apply this Convention, it may request complementary information.

4. The documents furnished by the Parties in application of this Convention shall be exempt from legalization formalities.

Article VIII. Information on fulfilment of the sentence

The Receiving State shall provide information to the Sending State on fulfilment of the sentence:

- (a) When the sentence has been completed;
- (b) If the offender escapes; or
- (c) If the Sending State requests a special report.

Article IX. Jurisdiction

The Sending State shall maintain exclusive jurisdiction over the sentence passed and any other procedure providing for a review or amendment of sentences issued by its judicial bodies. The Sending State shall also retain the power to reprieve, pardon or grant clemency to the offender. On receipt of notice of any decision in this regard, the Receiving State shall promptly implement the corresponding measure in accordance with its legislation on the subject.

Article X. Fulfilment of the sentence

1. Following transfer, the offender shall serve the sentence in accordance with the norms of the penitentiary regime of the Receiving State. In no case may the nature or duration of a prison sentence passed by the Sending State be altered.

2. No sentence shall be executed by the Receiving State in such a way as to prolong the duration of imprisonment beyond the term of the sentence passed by the court in the Sending State.

3. If a national of one Party was serving a sentence passed by the other Party under a regime of parole or probation, whether anticipated or supervised, he/she shall be able to serve that sentence supervised by the authorities of the Receiving State.

4. The judicial authority of the Sending State shall request the supervision measures it requires in writing through the diplomatic channel.

5. For the purposes of this Article, the competent authority of the Receiving State may order supervision measures as requested by the Sending State. It shall inform the requester of how the offender will be supervised and immediately report any failure by the offender to comply with the obligations assumed.

Article XI. Minor under special treatment

This Convention shall be applicable to minors subject to special treatment under the laws of the Parties. Confinement measures applied to such minors shall be fulfilled in accordance with the laws of the Receiving State. For the purposes of transfer, express consent shall be obtained from the minor's legal representative, pursuant to paragraph 5 of Article III of this Convention.

Article XII. Transit facilities

1. Should either of the Parties enter into an agreement for the transfer of offenders with a third-party State, the other Party shall cooperate in facilitating the transit of offenders through its territory under that agreement.

2. The Party intending to effectuate such transfer shall advise the other Party thereof in advance.

Article XIII

This Convention may also be applied to sentences passed before it entered into force.

Article XIV. Temporary application

Each Party shall take the legislative measures needed to fulfil the aims of this Convention, and shall establish adequate administrative procedures to ensure that a prison sentence imposed by the Sending State has legal effect in the Receiving State.

Article XV

1. This Convention shall be subject to ratification and shall enter into force 30 days after the date of exchange of the respective ratification instruments.

2. This Convention may be amended by mutual agreement between the Parties, and the amendments agreed upon shall enter into force in accordance with the procedure established in paragraph 1 of this Article.

3. This Convention shall remain in force indefinitely. Either of the Parties may terminate it by giving written notice through the diplomatic channel. Termination shall take effect 180 days following such notification.

Signed in Mexico City on 25 October 2002 in two original copies in Spanish, each being equally authentic.

For the Government of United Mexican States:

JORGE CASTAÑEDA
Secretary of State for Foreign Relations

For the Government of the Republic of Peru:

ALLAN WAGNER
Minister of Foreign Relations

[TRANSLATION - TRADUCTION]

ACCORD RELATIF À L'EXÉCUTION DES SENTENCES PÉNALES ENTRE
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LE GOU-
VERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU

Le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République du Pérou, ci-après dénommés "les Parties",

Désireux de faciliter la réadaptation sociale des personnes condamnées en adoptant les méthodes adéquates,

Considérant que, pour atteindre ces objectifs, il convient de donner aux nationaux privés de liberté ou en statut de liberté conditionnelle, suite à un jugement condamnatore, la possibilité de purger leur peine dans leur milieu social d'origine,

Sont convenus de ce qui suit:

Article I. Définitions

Aux fins du présent Accord, on entendra par:

1. "Sentence": La décision judiciaire définitive imposée à une personne pour sanctionner l'accomplissement d'une infraction entraînant une peine privative ou restrictive de liberté, la mise en liberté surveillée, une condamnation conditionnelle ou d'autres formes de supervision non assorties de détention.

Aux fins du présent Accord, on entendra qu'un jugement est considéré comme définitif lorsque la sentence a été prononcée, qu'aucun recours juridique n'est en cours et qu'il n'existe aucune procédure légale susceptible de le modifier, si ce n'est le recours extraordinaire de révision, pour les cas où la législation nationale de l'une ou l'autre des Parties en disposerait ainsi.

2. "Personne condamnée": La personne qui purge une peine en application d'une décision judiciaire définitive.

3. "État de réception": L'État vers lequel la personne condamnée peut être transférée, ou a déjà été transférée, en vue d'y servir sa peine.

4. "État d'envoi": L'État qui a imposé une condamnation et à partir duquel la personne condamnée pourra être transférée ou a été transférée.

5. "Condamnation": La peine à durée limitée imposée par un organisme judiciaire de l'État d'envoi, suite à l'accomplissement d'un délit. Il s'agit d'une peine privative ou restrictive de liberté devant être purgée dans ledit État, dans un établissement pénitentiaire, dans un hôpital, une institution ou en régime de liberté surveillée non assortie de détention.

Article II. Généralités

1. Chacune des Parties s'oblige à fournir à l'autre Partie, en application des dispositions du présent Accord, la collaboration la plus complète possible en matière de transfèrement de personnes condamnées.

2. En vertu des dispositions du présent Accord, une personne condamnée sur le territoire d'une Partie pourra être transférée sur le territoire de l'autre Partie pour y purger la peine qui lui a été imposée. À cette fin, elle pourra exprimer soit à l'État d'envoi soit à l'État de réception sa volonté d'être transférée en vertu du présent Accord, sous réserve que les Parties examinent la demande en question et, le cas échéant, marquent leur approbation, conformément aux dispositions de l'article VI.

3. L'une ou l'autre des Parties pourra demander le transfèrement, conformément aux dispositions de l'article VI du présent Accord.

Article III. Conditions pour le transfèrement

L'application du présent Accord sera soumise aux conditions suivantes:

1. La personne condamnée doit être un ressortissant de l'État de réception.

2. La durée de la peine qu'elle doit encore purger au moment de la présentation de la demande doit encore être supérieure à six (6) mois.

3. Le jugement doit être définitif, conformément aux dispositions de l'article 1 du présent Accord.

4. La personne transférée ne pourra être rejugée dans l'État de réception pour le délit ayant donné lieu à la condamnation imposée par l'État d'envoi et à son transfèrement ultérieur.

5. La personne condamnée devra donner son consentement par écrit. Au cas où celle-ci serait mineure ou frappée d'incapacité, les Parties pourront demander que le consentement soit accordé par écrit par la personne possédant légalement les capacités requises, en vertu de leur législation interne.

6. La personne condamnée devra avoir effectué le paiement, ou garanti celui-ci à la satisfaction de l'État d'envoi, des amendes, frais de justice, indemnisations et condamnations financières de tout ordre qui sont à sa charge en vertu des dispositions de la sentence condamnatrice. Exception sera faite pour la personne condamnée qui prouve valablement son insolvabilité.

7. L'État d'envoi et l'État de réception devront déclarer expressément leur consentement au transfèrement, qui se fera dans le respect de la législation interne des deux Parties.

8. La peine à purger ne devra pas être une peine de mort ni toute autre peine non prévue par la législation nationale des Parties.

9. Le délit ayant donné lieu à la sentence ne sera pas d'ordre politique. De même, la condamnation ne pourra pas être le résultat uniquement d'un délit militaire.

10. Le délit pour lequel la personne a été condamnée doit également être punissable dans l'État de réception; il ne sera toutefois pas tenu compte des différences d'aspect des délits qui n'affectent pas leur portée ou leur nature.

Article IV. Autorités exécutives

1. Pour l'exécution des dispositions du présent Accord, le Gouvernement des États-Unis du Mexique désigne comme autorité exécutive le Ministère de la Sécurité Publique, par le biais de son organe administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale.

2. Pour l'exécution des dispositions du présent Accord, le Gouvernement de la République du Pérou désigne comme autorité exécutive le Ministère de la Justice.

Article V. Obligation de fournir des renseignements

1. Les Parties informeront toute personne condamnée à qui le présent Accord pourrait être applicable de l'existence de ce dernier.

2. Si la personne condamnée a exprimé à l'État d'envoi sa volonté d'être transférée en vertu du présent Accord, cette Partie devra en informer au plus vite l'État de réception, dès que la sentence prononcée sera définitive.

3. Les renseignements communiqués comprendront:

- a) Les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée;
- b) L'acte de naissance de la personne condamnée ou tout document adéquat accréditant sa nationalité, conformément à la législation interne de l'État de réception;
- c) Le cas échéant, son adresse dans l'État de réception;
- d) Un exposé des faits ayant donné lieu à la condamnation;
- e) La nature, la durée et la date de début de la condamnation;
- f) Une copie certifiée conforme de la sentence; et
- g) Toute autre information que l'État de réception estimerait nécessaire par rapport aux conséquences du transfèrement et à la portée du présent Accord.

4. Si la personne condamnée a exprimé à l'État de réception sa volonté d'être transférée en vertu du présent Accord, l'État d'envoi devra communiquer à l'État de réception, à sa demande, les informations mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus.

5. La personne condamnée devra être tenue informée par écrit de toute démarche entreprise par l'État d'envoi ainsi que de la décision prise par l'une ou l'autre des Parties par rapport à sa demande de transfèrement.

Article VI. Demande de transfèrement

1. Chaque transfèrement de ressortissants mexicains condamnés commencera par une demande formulée par écrit, que l'Ambassade des États-Unis du Mexique auprès de la République du Pérou présentera au Ministère des Affaires étrangères.

2. Chaque transfèrement de ressortissants péruviens condamnés commencera par une demande formulée par écrit, que l'Ambassade du Pérou auprès des États-Unis du Mexique présentera au Secrétariat des Affaires étrangères.

3. Si l'État d'envoi accepte la demande de transfèrement de la personne condamnée et exprime son consentement, il informera dès que possible l'État de réception de son accord, de sorte que le transfèrement puisse avoir lieu dès que les formalités internes auront été accomplies.

4. La remise de la personne condamnée par les autorités de l'État d'envoi à celles de l'État de réception se fera au lieu convenu entre les deux Parties. L'État de réception sera responsable de la garde de la personne condamnée à partir du moment où celle-ci lui est remise, comme indiqué dans l'acte de remise.

5. Avant de décider du transfèrement d'une personne condamnée, il faut voir si ce transfèrement est susceptible de contribuer positivement à sa réhabilitation sociale, prendre en considération la gravité du délit et les liens possibles de l'auteur avec la criminalité organisée, son état de santé et les liens sociaux qu'il pourrait avoir avec chacune des Parties.

6. Si l'une des Parties n'approuve pas le transfèrement d'une personne condamnée, elle informera sans tarder l'autre Partie de sa décision, en indiquant la cause ou le motif de ce refus.

7. En cas de refus de transfèrement, l'État de réception ne pourra pas introduire une nouvelle demande, mais l'État d'envoi pourra revoir sa décision à la demande de l'État de réception, si celui-ci invoque des circonstances exceptionnelles.

8. Avant de réaliser le transfèrement, à la demande de l'État de réception, l'État d'envoi lui permettra de vérifier, par le biais d'un fonctionnaire désigné par ledit État de réception, par la voie diplomatique, si la personne condamnée a exprimé volontairement son désir de transfèrement et en toute connaissance des conséquences juridiques inhérentes à celui-ci.

9. Les frais occasionnés suite au transfèrement seront à charge de l'État de réception. Toutefois, celui-ci pourra effectuer les démarches nécessaires pour que la personne condamnée paie les frais correspondants.

Article VII. Constitution du dossier

1. À la demande de l'État d'envoi, l'État de réception devra lui fournir les pièces suivantes:

- a) Une copie des dispositions légales pertinentes de l'État de réception, prouvant que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'État d'envoi, constituent un délit ou une infraction sur son territoire.

- b) Une déclaration concernant l'effet, par rapport à la personne condamnée, produit par toute loi ou règlement pertinent relatif à sa détention dans l'État de réception, après son transfèrement.
2. En cas de demande de transfèrement, l'État d'envoi devra fournir à l'État de réception les documents indiqués ci-après, à moins que l'une ou l'autre des Parties n'ait refusé le transfèrement:
- a) Une copie de la sentence et du texte des dispositions légales appliquées et qui ont servi à appuyer la décision;
 - b) L'indication de la durée de la peine déjà servie, y compris tous les renseignements concernant toute détention préventive, remise de peine ou toute autre circonstance relative à l'accomplissement de la peine;
 - c) Une déclaration montrant que la personne condamnée consent au transfèrement, selon les dispositions du paragraphe 5 de l'article III. Cette déclaration devra être faite devant l'autorité consulaire compétente;
 - d) Le cas échéant, un rapport médical ou social sur la personne condamnée ou sur son traitement dans l'État d'envoi ainsi que toute recommandation pour la poursuite de ce traitement dans l'État de réception.
3. Si l'État de réception considère que les rapports fournis par l'État d'envoi ne sont pas suffisants pour permettre l'application du présent Accord, il pourra demander des renseignements complémentaires.
4. Les documents que les Parties se remettent en vertu des dispositions du présent Accord ne devront pas être légalisés.

Article VIII. Informations relatives à la peine

L'État de réception fournira à l'État d'envoi les informations concernant l'accomplissement de la peine:

- a) Lorsque la peine sera purgée;
- b) Si la personne condamnée s'est évadée; ou
- c) Si l'État d'envoi lui demande un rapport spécial.

Article IX. Jurisdiction

L'État d'envoi conservera la juridiction exclusive pour ce qui est des peines infligées et de toute autre procédure ayant trait à la révision ou à la modification des sentences imposées par ses organes judiciaires. L'État d'envoi conservera ainsi la faculté de commuer la peine de la personne condamnée ou de lui accorder grâce ou pardon. Dès qu'il aura été notifié d'une telle décision, l'État de réception devra prendre immédiatement les mesures qui s'imposent, conformément à sa législation en la matière.

Article X. Accomplissement de la peine

1. La personne condamnée et transférée purgera sa peine conformément aux normes du régime pénitentiaire de l'État de réception. La nature et la durée de la peine privative de liberté prononcée par l'État d'envoi ne pourront en aucun cas être modifiées.

2. L'État de réception n'appliquera aucune mesure susceptible de prolonger la durée de l'emprisonnement au-delà de la date prévue dans la sentence du tribunal de l'État d'envoi.

3. Si un ressortissant d'une des Parties purge une peine imposée par l'autre Partie sous le régime de la condamnation conditionnelle ou de liberté conditionnelle, anticipée ou surveillée, il pourra purger cette peine sous la surveillance des autorités de l'État de réception.

4. L'autorité judiciaire de l'État d'envoi demandera les mesures de surveillance qui s'imposent, par le biais d'une lettre rogatoire transmise par la voie diplomatique.

5. Aux effets du présent article, l'autorité compétente de l'État de réception pourra dicter les mesures de surveillance demandées par l'État d'envoi et elle tiendra celui-ci informé de sa manière de procéder pour mener à bien la surveillance de la personne condamnée; elle lui communiquera en outre immédiatement tout non-respect des obligations imposées à la personne condamnée.

Article XI. Mineur sous traitement spécial

Le présent Accord s'appliquera aux mineurs jouissant d'un traitement spécial conformément à la législation des Parties. L'exécution de la mesure privative de liberté qui s'applique à de tels mineurs d'âge se fera conformément aux lois de l'État de réception. Le consentement exprès du représentant légal du mineur sera requis pour le transfèrement, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article III du présent Accord.

Article XII. Facilités de transit

1. Si l'une des Parties conclut un Accord de transfèrement des personnes condamnées avec un État tiers, l'autre Partie devra collaborer en autorisant le transit desdites personnes condamnées par son territoire.

2. La Partie qui aurait l'intention de procéder à un tel transfèrement devra en informer l'autre Partie au préalable.

Article XIII. Application

Le présent Accord pourra s'appliquer également à l'accomplissement de peines prononcées avant son entrée en vigueur.

Article XIV. Respect des dispositions

Afin de respecter les objectifs du présent Accord, chacune des Parties adoptera les mesures législatives nécessaires et définira les procédures administratives adéquates afin que

la sentence de peine privative de liberté imposée par l'État d'envoi sorte ses effets dans l'État de réception.

Article XV. Validité et modifications

1. Le présent Accord sera soumis à ratification et il entrera en vigueur trente (30) jours après la date de l'échange des instruments de ratification respectifs.

2. Le présent Accord pourra être modifié par consentement mutuel entre les Parties et les modifications convenues entreront en vigueur conformément aux dispositions établies au paragraphe 1 du présent article.

3. Il aura une validité indéterminée. Chacune des Parties pourra, à tout moment, manifester sa volonté d'y mettre fin, moyennant notification adressée par écrit et par la voie diplomatique à l'autre Partie, auquel cas l'Accord cessera de produire ses effets cent quatre-vingts (180) jours après ladite notification.

Signé en la ville de Mexico, le vingt-cinq octobre de l'an deux mil deux, en deux exemplaires originaux rédigés en langue espagnole et faisant également foi.

Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique:
Le Secrétaire des Affaires étrangères,
JORGE CASTAÑEDA

Pour le Gouvernement de la République du Pérou :
Le Ministre des Affaires étrangères,
ALLAN WAGNER

